



Consejo de
Transparencia y
Buen Gobierno

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN

N/REF: RT/0377/2017

FECHA: 09 de octubre de 2017



ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

En respuesta a la Reclamación número RT/0377/2017 presentada por [REDACTED] Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Ciudad Real, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente **RESOLUCIÓN**:

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos que han dado lugar a la presente reclamación pueden sistematizarse como sigue:
 - Mediante escrito de 11 de agosto de 2016, remitido al Ayuntamiento de Valdepeñas -Ciudad Real-, el Colegio Oficial, tras poner de manifiesto que se ha tenido conocimiento del requerimiento que dicho Ayuntamiento había realizado al promotor de unas obras de reforma y división de una vivienda de dicha localidad por el que se requiere a fin de que el proyecto de obra sea redactado por Arquitecto de conformidad con el art. 2 del CTE y art. 10 de LOE lo que invalida el proyecto técnico que le ha sido presentado por un arquitecto, entienden que el reiterado requerimiento es contrario a la ley por lo que a través de ese escrito impugnan el requerimiento efectuado, considerando que las reformas a efectuar es una obra que no necesita el proyecto arquitectónico y sin que la aplicación del CTE sea la causa determinante para la exigencia o no de dicho proyecto arquitectónico.

ctbg@consejodetransparencia.es



- Al no obtener Resolución de la impugnación planteada, el 28 de octubre de 2016 se remitió por el Colegio Profesional de referencia un nuevo escrito solicitando al Ayuntamiento de Valdepeñas que dictase Resolución sobre lo solicitado. Con posterioridad, esa solicitud destinada a obtener una Resolución expresa fue reiterada el 13 de marzo de 2017 y el 14 de agosto de 2017.
 - Mediante escrito de 6 de septiembre de 2017 del Ayuntamiento de Valdepeñas se comunica al Colegio Profesional el traslado de un oficio de remisión al Colegio y el acuse de recibo de salida.
 - A través de un escrito registrado en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 5 de octubre de 2017, el interesado plantea una Reclamación ante esta Institución en la que, tras indicar que pasado más de un año desde la solicitud presentada por el Colegio no se ha obtenido pronunciamiento alguno frente al cual pudiese ejercer las vías de recurso que la legislación contempla, solicita “obtener de la Corporación reclamada Resolución expresa sobre la petición realizada en el escrito de 11 de agosto de 2016 y los escritos subsiguientes de fecha 20 de octubre de 2016, 3 de marzo de 2017 y 14 de agosto de 2017”.
2. El 6 de octubre de 2017, por la Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales de este Consejo, se dio traslado del expediente al Director de la Oficina de Transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para conocimiento.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno - desde ahora, LTAIBG-, en relación con su artículo 38.2.c) y el artículo 8.2.d) del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este organismo es competente para resolver, con carácter potestativo y previo a un eventual recurso contencioso-administrativo, las reclamaciones que se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información.
2. A tenor del artículo 24.6 de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene competencia para conocer de las reclamaciones que regula dicho precepto *“salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley”*. Tal disposición prevé en sus apartados 1 y 2 lo siguiente:

“1. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al



*órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas.
(...).*

2. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. A tal efecto, deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado, en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias”.

En desarrollo de las anteriores previsiones normativas el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha suscribieron el pasado 30 de diciembre de 2015 un Convenio para la atribución de la competencia al citado Consejo para la resolución de las reclamaciones previstas en el citado artículo 24 de la LTAIBG respecto de las resoluciones dictadas por aquella Administración Autonómica y su sector público, y por las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial y su sector público.

3. La primera cuestión en la que debemos centrar nuestra atención consiste en que, según se contempla en el preámbulo de la LTAIBG, ésta tiene por finalidad “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. A este fin, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma.

Por su parte, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

En último término, el artículo 24.1 de la LTAIBG prevé, como mecanismo de garantía del ejercicio del derecho y medio de impugnación en los procedimientos de acceso a la información pública, la presentación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de una reclamación frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

4. De acuerdo con los preceptos de la LTAIBG reseñados en el anterior Fundamento Jurídico, y teniendo en cuenta el objeto que motiva la pretensión de la presente Reclamación, cabe concluir que la misma queda fuera del ámbito de aplicación de la citada LTAIBG. En efecto, tal y como se deduce de la reseña sumaria de los antecedentes de hecho reflejada más arriba, no hay una solicitud de acceso a la información pública, entendida ésta en los términos del artículo 13 de la LTAIBG, ni



un acto expreso o presunto de la administración municipal con relación al derecho de acceso a la información pública solicitada que accione la reclamación al amparo del artículo 24 de la reiterada LTAIBG. Por el contrario, lo que origina esta Resolución es la interposición de un recurso frente a un requerimiento del Ayuntamiento de referencia.

III. RESOLUCIÓN

En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede **INADMITIR A TRÁMITE** la Reclamación presentada, por entender que el objeto de la misma queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

LA PRESIDENTA DEL
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Esther Arizmendi Gutiérrez

